

Señor(a)  
**JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO – REPARTO**  
**Manizales – Caldas.**

ANGELICA MARIA DIAZ LOPEZ, mujer, mayor de edad, identificada con C.C. No 42.125.061 expedida en Pereira, abogada en ejercicio portadora de la T.P. 208889 del Consejo Superior de la Judicatura, instauo proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PROTECCION S.A. Entidad de derecho privado vinculada al Régimen de Seguridad Social Integral en calidad de Administradora del Sistema de Ahorro Individual con Solidaridad, representada por su presidente JUAN DAVID CORREA SOLORZANO o por quien haga sus veces al momento de la notificación y en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, Entidad de Derecho Público del orden Nacional, representada legalmente por su presidente JUAN MANUEL VILLA LORA o por quien haga sus veces al momento de la notificación, con el fin de que en sentencia de primera instancia, decida:

#### **1. PRETENSIONES Y CONDENAS.**

1. Que se declare la INEFICACIA Y/O NULIDAD DEL ACTO JURIDICO DE TRASLADO de régimen pensional, realizado el 23 de enero de 2017, por YOLANDA DEL SOCORRO VELEZ RESTREPO en el cual migró del Régimen del antiguo INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES, a SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO D EPENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.
2. Que se ordene a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO D EPENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A, remitir a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, los saldos, cotizaciones y/o aportes, bonos pensionales, sumas adicionales juntos con sus intereses y con la diferencia entre el valor de lo trasladado por la AFP y lo que hubiere cotizado de haber permanecido en el otrora INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES, relacionados con la señora YOLANDA DEL SOCORRO VELEZ RESTREPO.
3. Que se ordene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, que una vez reciba de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO D EPENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A, las cotizaciones y/o aportes , los saldos, beneficios, rendimientos y diferencias económicas, acepte el traslado pensional de la señora YOLANDA DEL SOCORRO VELEZ RESTREPO del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al de Prima Media con Prestación Definida.
4. Que se condene a las agencias en derecho y costas procesales correspondientes.

#### **2. HECHOS**

1. En diciembre de 1.992 la señora YOLANDA DEL SOCORRO VELEZ RESTREPO, se vinculó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES

2. El 23 de enero de 2017, mi poderdante, firmó formulario de traslado del Régimen de Prima Media con Prestación definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad administrado Protección S. A.
3. El Asesor de SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. que realizó el traslado pensional de la actora no brindó a la afiliada la asesoría legal y financiera que se requería para que ella tomara una decisión libre e informada no le dio información plena, cierta, seria y oportuna que le permitiera la decisión bajo un consentimiento completo, informado y consciente de las consecuencias económicas que generaría la decisión.
4. El Asesor de la AFP, no ofreció a la afiliada las proyecciones de su expectativa pensional en los 2 regímenes, teniendo como apoyo el mismo salario en ambos cálculos; ni tampoco precisó el valor de la pensión si hubiera permanecido en el Régimen de Prima media con Prestación definida, ni le indicó las consecuencias económicas en el valor del bono pensional por redención anticipada en caso que quisiera pensionarse antes de los 57 años de edad ya que en caso de querer pensionarse anticipadamente le afectaría el monto de la mesada que se causa en el RAIS.
5. Las Administradoras de Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tienen la obligación de información adecuada y suficiente conforme a lo dispuesto por el artículo 97 del decreto 663 de 1993 y el artículo 12 del Decreto 720 de 1994 y fueron incumplidas por el asesor de PROTECCION S.A
6. La señora YOLANDA DEL SOCORRO VELEZ RESTREPO, cumple 57 años de edad el 15 de marzo de 2020.
7. protección s.a. mediante escrito QOR-01286414, dio respuesta negativa a la solicitud de traslado hecha por la demandante, mediante escrito radicado en la oficina de la administradora el 11 de Septiembre de 2020, argumentando:  

*“1. Tal como indicamos, no es procedente realizar la desvinculación en este régimen, teniendo en cuenta que esta administradora dio cumplimiento a cada uno de los presupuestos legales “*
8. PROTECCION S.A., informó a mi poderdante sobre la proyección pensional indicándole que al momento de cumplir 57 y 60 años, no cotizando más o cotizando 12 meses al año la pensión que obtendría en el RAIS sería de \$828.116
9. PROTECCION, se negó a dar información a la demandante acerca de cuanto sería la mesada pensional en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
10. El 5 de Octubre de 2020 la señora YOLANDA SEL SOCORRO VEELZ RESTREPO, solicitó a COLPENSIONES, que fuera inscrita como afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida y se tuviera por Ineficaz el traslado al RAIS.
11. Mediante comunicación BZ2020\_9967374-23671030 de 5 de OCTUBRE de 2020, Colpensiones negó el traslado pensional, aduciendo que a la afiliada le faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho pensional.

12. Si la señora VELEZ RESTREPO, hubiera permanecido en el Régimen de Prima Media con prestación Definida y teniendo en cuenta los mismos salarios devengados la mesada pensional al cumplir los 57 años sería superior a la que percibirá en el Régimen De Ahorro Individual Con Solidaridad.
13. Actualmente la demandante está afiliada y cotizando para pensiones en la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES PROTECCION S.A. .

### **3. FUNDAMENTOS JURIDICOS**

#### **3.1. RESPECTO AL TRASLADO Y LA OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN.**

El traslado pensional es un acto jurídico, y para ser legal y obligatorio debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 1502 del Código Civil, es decir, ser voluntario que adolezca de vicios, en el consentimiento, que recaiga sobre objeto y causa lícita. Conforme al artículo 1508 de la misma normatividad los vicios en el consentimiento son: Error, fuerza y dolo.

El artículo 1740 del Código Civil Estipula:

“Es nulo el acto o contrato a que falta de alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa”

En nuestro Estado Social de derecho, el Juez Laboral debe reconocer la autonomía de la voluntad de las partes, y tiene la obligación y el poder de intervención sobre la libertad contractual de los particulares buscando poner límites y restricciones tendientes a proteger los derechos fundamentales en especial a las partes en situación de inferioridad en el conocimiento del objeto contractual y que a raíz de una decisión apresurada resultan gravemente afectadas en el Derecho Fundamental a la Pensión.

La afiliada que en la etapa precontractual es abordada por la AFP, para buscar su traslado pensional tiene derecho a ser bien informada por el promotor de las ventajas y desventajas de la decisión a asumir dado que no basta que el traslado sea voluntario al firmar el contrato respectivo, sino que es obligatorio que conozca las consecuencias de esa determinación, ese conocimiento informado se constituye en un derecho para la afiliada y en una obligación para el promotor de la AFP.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que existirá ineficacia de la afiliación cuando quiera que la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso a la pensión o limitando su monto, sin que sea suficiente la simple suscripción del formulario, sino que es necesario el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad. Así lo dijo en sentencia 47125 del 27 de septiembre de 2017 Magistrado Ponente. Gerardo Botero Zuluaga.

“Así que es la propia ley la que sanciona, con severidad, el incumplimiento íntegro de los deberes de información que les atañe e incluso, para la controversia aquí suscitada ello era determinante, de un lado porque la simple manifestación genérica de aceptar las condiciones, no era suficiente y, de otro, correspondía dar cuenta de que se actuó diligentemente, no solo por la propia imposición que trae consigo la referida norma, sino porque en los términos del artículo 1604 del Código Civil, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo y, en este específico caso ellas no se agotan solo con traer a colación los documentos suscritos, sino la evidencia de que la asesoría brindada era suficiente para la persona, y esto no se satisfacía únicamente con llenar los espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la información plasmada correspondiera a la realidad y atendiera las pautas

para que se adoptara una decisión completamente libre, en las voces del referido artículo 13 de la Ley 100 de 1993”

Por lo tanto era necesaria la información previa, clara y precisa para la afiliada de las consecuencias económicas en su mesada pensional si hacía el traslado.

No podemos perder de vista que la demandante es una consumidora financiera y el artículo 97 del decreto 663 de 1993 establece:

*“Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas”*

Por lo tanto la demandante debía recibir una información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto del producto que se le ofrecía y de los riesgos que podían derivarse de su consumo o utilización. No recibir esa información significa que la demandante no sabría cuáles son las consecuencias de su decisión. Recibir la información se constituye, pues, en un derecho para la afiliada y una obligación para el promotor de la AFP.

### 3.2. CARGA DE LA PRUEBA DE LA INFORMACION Y DILIGENCIA Y CUIDADO.

Conforme a lo establecido en el artículo 1604 del Código Civil el deber jurídico de la información está en cabeza de la AFP, dicha norma consagra que la prueba de la diligencia o cuidado en la celebración de los contratos, incumbe probarlo a quien debió emplearlo; luego es la AFP accionada quien tiene la obligación procesal de demostrar que brindó la información que exige los artículos 97 del decreto 663 de 1993 y el artículo 12 del decreto 720 de 1994 para que la afiliada decidiera su cambio de régimen.

Respecto al traslado de régimen la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en el año de 2019 se ha pronunciado al respecto en sentencia SL 1452 de 3 de abril de 2019 dijo:

“La Sala considera desacertada esta tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre impresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado.

Sobre el particular, en la Sentencia SL19447-2017 la Sala explicó:

Por demás las implicaciones de la asimetría en la información, determinante para advertir sobre la validez o no de la escogencia del régimen pensional, no solo estaba contemplada con la severidad del artículo 13 atrás indicado, sino además el estatuto financiero de la época, para controlarla, imponía, en los artículos 97 y siguientes que las administradoras, entre ellas las de pensiones, debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios de buena fe «y de servicio a los intereses sociales» en las que se sancionaba que no se diera información relevante, e incluso se indicaba que «Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear

la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...].

De esta manera, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado.”

Respecto a la carga de la prueba dijo:

“Como se ha expuesto, el deber de información al momento del traslado entre regímenes, es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, y su ejercicio debe ser de tal diligencia, que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión”.

“Paralelamente, no puede pasar desapercibido que la inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado obedece a una regla de justicia, en virtud de la cual no es dable exigir a quien está en una posición probatoria complicada —cuando no imposible— o de desventaja, el esclarecimiento de hechos que la otra parte está en mejor posición de ilustrar. En este caso, pedir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que (iii) es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento.”

#### **4.- FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Se tendrán como fundamentos en derecho lo dispuesto.

Artículo 48 y 53 de la Constitución Nacional, regulan el Derechos a la Seguridad Social en pensiones y los principios constitucionales que regulan el sistema pensional

Artículos 1502, 1508, 1604,1740 y siguientes del Código Civil, que regulan los requisitos esenciales de los actos jurídicos, su nulidad, carga de la prueba, diligencia y cuidado, etc.

Artículo 97 del decreto 663 de 1993 que señala a la afiliada a pensiones como consumidor financiero estipulando derechos de información clara y transparente.

Decreto 720 de 1994. Artículos 10, 12, 14, 15, 16, que imponen a las AFP obligaciones de información a los afiliados y a las responsabilidades de los asesores contratados.

Decreto 692 de 1994 que reglamenta el traslado de regímenes.

Artículo 114 de la ley 100 de 1.993, que regula el traslado de regímenes pensionales.

Artículo 25 y siguientes del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Ley 1564 de 2012 que determinan los requisitos legales de la demanda y su trámite.

## **5.- PRUEBAS.**

### **5.1. Documentales.**

- Poder conferido
- Copia de la cédula de ciudadanía de la demandante
- Formulario de peticiones, quejas, reclamos sugerencias y denuncias, presentado ante Colpensiones el 05 de octubre de 2020, donde le solicitó a esa entidad que le permitieran el retorno al RPM.
- Respuesta dada por Colpensiones identificada con el No BZ2020\_9967374-23671030, a través de la cual le fue negada la nulidad de la afiliación al RAIS y el retorno al RPM.
- Solicitud hecha a protección S.A el 11 de septiembre de 2020 y radicada en esa entidad el 11 de septiembre de 2020 donde solicitó la nulidad de su traslado al RAIS y pidió retornar al RPM.
- Respuesta No 012866414, emitida por protección, donde le informan a la demandante, que no es procedente la desvinculación del RAIS y cálculo de la mesada pensional.
- Formulario de afiliación a protección del 23 de enero de 2017.
- Historia laboral de la demandante, expedida por Porvenir.
- Certificado de Existencia y Representación de la AFP PROTECCION.

### **5.2. Aporte de pruebas por parte del fondo (carga dinámica de la prueba).**

Conforme a lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, le solicito al Despacho que ordene a la demandada aportar las siguientes pruebas:

- Prueba documental o testimonial que dé cuenta de la información amplia, oportuna y suficiente que se le brindó a la señora YOLANDA DEL SOCORRO VELEZ RESTREPO, por parte de protección al momento del traslado.

5.3. Constancia de que Porvenir le informó a la señora YOLANDA DEL SOCORRO VELEZ RESTREPO, tenía término para trasladarse de Régimen hasta antes de cumplir los 47 años de edad.

## **6.- COMPETENCIA CUANTIA Y PROCEDIMIENTO.**

Es competente el Juez Laboral del Circuito de Manizales Caldas por la naturaleza del asunto laboral en materia de pensiones regulado por la ley 100 de 1993 en concordancia con la ley 797 de 2003.

La reclamación de traslado de régimen a Colpensiones y Porvenir se hizo en la ciudad de Manizales Caldas.

La cuantía la estimo en más de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El procedimiento a seguir es el del proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia conforme a lo establecido en el artículo 74 y siguiente del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

## **7. ANEXOS.**

- Poder a mí, otorgado
- Los documentos relacionados como pruebas.

**8. NOTIFICACIONES.**

La Sociedad Administradora de Fondos De Pensiones Y Cesantías “**PPROTECCION S.A.**”, en la carrera Calle 26 No. 85 B 09 local 101 Bogotá D.C. a través de su representante legal. Correo Electrónico: [notificacionesjudiciales@porvenir.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@porvenir.com.co)

La Administradora Colombiana de Pensiones “**COLPENSIONES**” en la Carrera 10 No 73-33 Torre B Piso 11 Bogotá D.C. conforme al artículo 197 de la ley 1437 de 2011, Colpensiones dispuso para notificaciones, el correo electrónico: [notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co)

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la Carrera 7ª No 75-66 Piso 2 y 3 Bogotá D.C. Correo Electrónico: [procesos@defensajuridica.gov.co](mailto:procesos@defensajuridica.gov.co)

La demandante YOLANDA DEL SOCORRO VELEZ RESTREPO, en la calle 70 No 27a-19, Apto 301 Edificio Sevilla, Barrio Palermo Manizales.  
Correo electrónico: [yolyvr0315@gmail.com](mailto:yolyvr0315@gmail.com).

La apoderada judicial en Carrera 8 # 20-67 OF 503 Pereira Cel. 3215174193  
Correo Electrónico: [info@enlacepensional.com](mailto:info@enlacepensional.com)

Respetuosamente,



ANGELICA MARIA DIAZ LOPEZ  
C.C. 42.125.061 expedida en Pereira  
T.P. 208.889 del Consejo Superior de la Judicatura